

# ECONOMÍA



Las Comunidades cerraron 2014 con un déficit del 1,66%, superior al objetivo del 1%.

“Existe el riesgo de que la política a corto se instale entre los nuevos gobiernos regionales, lo que supondrá, previsiblemente, abandonar las reformas”, explican los expertos para los que el ajuste pendiente en las cuentas regionales, tal y como se ha comprometido el Gobierno ante Bru-

selas, está en cuestión. Y si el Gobierno de la mayoría absoluta ‘popular’ no logró meterlas en cintura, ahora que el PP la ha perdido, la cosa se complica y mucho. El resultado electoral ha dibujado un escenario de difícil engranaje, tras el espaldarazo a los partidos alternativos.

## El mapa político tras el 24-M pone en peligro reformas por 18.000 millones y el acuerdo sobre financiación

# El puzle de partidos amenaza el ajuste de las CC AA

■ Ana Sánchez Arjona

Bruselas muestra su preocupación por el panorama político tras el resultado del 24M. El alumno ejemplar en lo que a reformas se refiere, el país cumplidor que tanto alaba Europa, la OCDE, el FMI y, en concreto, Alemania, pero que no parece gustar tanto a los españoles, ha provocado un reparto de votos de difícil engranaje que han dado un espaldarazo a los partidos alternativos. “Existe el riesgo de que la política a corto se instale entre los nuevos gobiernos regionales, lo que supone abandonar las reformas y los ajustes para cumplir con el déficit”, señalan fuentes comunitarias.

Porque si algo preocupa en Bruselas son las comunidades autónomas, tal y como reflejaban los informes técnicos elaborados prácticamente desde siempre. Y si el Gobierno de la mayoría absoluta del PP no logró meterlas en cintura, ahora que el PP la ha perdido, la cosa se complica y mucho.

El duro ajuste pendiente en las cuentas regionales, tal y como se ha comprometido el Gobierno ante Bruselas, está en cuestión. A pesar de la incipiente recuperación, las comunidades empeoraron sus datos de déficit en 2014, y los analistas descartan que vayan a cumplir en el ejercicio actual. Los nuevos gobiernos autonómicos complicarán todavía más una de las tareas esenciales de la agenda de reformas que busca el saneamiento financiero de los territorios.

La agencia de calificación Fitch Ratings considera que existe una “mayor incertidumbre política” al cumplimiento de las metas fiscales. Esto se produce en un momento, recuerda, en que hay un compromiso político de limitar el gasto en las comunidades para cumplir con los objetivos de deuda y déficit.

Recuerda que las comunidades cerraron 2014 con un déficit del 1,66%, superior al objetivo del 1% y del 1,54% de 2013, con lo que acumulan ocho años consecutivos

de incumplimientos. Aunque reconoce que el comportamiento es diferente según la autonomía, “la debilidad recurrente muestra su incapacidad general para generar ahorros estructurales que permitan el pago de la deuda”.

En concreto y sobre la reducción del déficit público: Las comunidades autónomas constituyen el nivel de la Administración Pública que se ha perdido más en la senda de consolidación fiscal. Los nuevos Gobiernos regionales deberán formular un plan para ajustar el conjunto de sus presupuestos en cerca de 18.000 millones de euros durante este mandato. Se trata de una cifra que separa el desequilibrio alcanzado al cierre de 2014,

**El ajuste pendiente está en cuestión. A pesar de la incipiente recuperación, las Comunidades empeoraron sus cifras de déficit en 2014, y se descarta que cumplan en el ejercicio actual**

el 1,66% del PIB, 17.541 millones, y el equilibrio fiscal del 0% que deben conseguir al cierre de 2018, precisamente el período que coincide con el mandato electoral: si nada cambia, las nuevas elecciones se celebrarán en la primavera de 2019. El Programa de Estabilidad que el Gobierno remitió a Bruselas a finales de abril fija precisamente la desaparición del déficit autonómico para ese año.

### Subir impuestos

En el propio Programa de Estabilidad, el Gobierno avanza que hay margen para subidas impositivas autonómicas. Este será probablemente el camino, puesto que los nuevos Ejecutivos tienen ya los capítulos de gasto ajustadísimos. La cuestión es si llegarán a ponerse de acuerdo las nuevas coaliciones en los cuáles será la política fiscal adecuada. Pero en lo que sí parecen de acuerdo los partidos de izquierdas es que hay que subir impuestos. Por otro lado, las mayorías de izquierdas están negociando en la actualidad sobre la base de más gasto público: en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, el acuerdo

pasa por reactivar la televisión pública Canal 9. Los presupuestos son otro de los asuntos más importantes. Para alcanzar los objetivos del punto anterior, los nuevos gestores tienen una cita con las cuentas públicas regionales. Los resultados conocidos arrojan una fragmentación parlamentaria inédita, lo que es sinónimo de dificultades para aprobarlos. Donde no ha habido mayoría absoluta en los últimos años, el ciudadano ha podido ser testigo de lo que entraña esto: Cataluña ha vivido prorrogando cuentas año sí año no, después de alianzas de malabarista entre CiU, PP y ERC. Otro ejemplo es Navarra, que ha funcionado a base de prórrogas; este año siguen vigentes las cuentas de 2011. Las nuevas cámaras augu-

**La cuestión es si llegarán a ponerse de acuerdo las nuevas coaliciones en cuál será la política fiscal. Pero en lo que sí parecen de acuerdo los partidos de izquierdas es en que hay que subir impuestos**

ran líos considerables: la fragmentación va a más.

Las autonomías han ido cayendo en las redes de los Fondos de Financiación estatales por sus dificultades financieras primero, y por las ventajas después. Solo tres se han mantenido al margen; Madrid, País Vasco y Navarra. Impulso económico: España ha logrado, a trancas y barrancas, avanzar en la unidad del mercado interior en las autonomías y en una liberalización de horarios comerciales, medidas reclamadas por las grandes empresas para ganar competitividad. Estos pasos pueden desandarse rápidamente si finalmente los mandatos liberales dan paso a un proteccionismo de izquierdas o nacionalista.

Pero uno de los verdaderos problemas a los que se enfrenta el Gobierno central es al de la nueva financiación autonómica. El Gobierno del PP ha justificado el retraso de la reforma por el clima de división política territorial, en palabras del ministro Montoro, y eso que el grueso de los Ejecutivos autonómicos estaban gobernados por el PP. Nada hace pensar que ese clima de tensión vaya a mejorar con regiones de todos los colores, con una Cataluña que quiere recuperar el latido secesionista y una Andalucía hundida en la parálisis legislativa.

### Más dinero sobre la mesa

Si el Gobierno que tenía mayoría absoluta y pleno en los ejecutivos de las comunidades y no se ha atrevido con el tema, qué pasará cuando se plantee un escenario multipartidista... la cosa se complica y mucho”, explican fuentes consultadas para añadir que este asunto está directamente conectado con la situación que atraviesan comunidades como Valencia, Cataluña, Madrid, “que están infrafinanciadas, mientras otras que están en el otro extremo sí cumplen aunque a duras penas”. En opinión de los expertos, el Estado (y siempre condicionado a que se recuperen los ingresos tributarios) tendrá que volver a poner “más dinero sobre la mesa” para conseguir el acuerdo. Es decir, aumentar los recursos que actualmente da a las CCAA, ya que ninguna va a aceptar recibir menos que hasta ahora. “De hecho, llegar a un nuevo modelo de financiación con más recursos puede ser una vía para reducir el déficit, en lugar de por ajustes en el gasto, por el aumento de los ingresos”, aseguran. ¿Qué pasará con los planes de armonización fiscal del Gobierno con tributos como Sucesiones y Patrimonio? Las autonomías, incluso del PP, han dado batalla legal a Hacienda; las del PSOE o Podemos lo harán incluso más.

Cristóbal Montoro ya ha señalado que, de momento, no hay intención de incrementar la participación de las comunidades en los grandes impuestos. El ministro pretende, en el marco de la negociación del nuevo modelo, incluir reformas en los impuestos de titularidad estatal, pero cedidos al 100% a las comunidades autónomas. En este grupo se encuentra el impuesto sobre el patrimonio, sobre sucesiones y donaciones o sobre transmisiones patrimoniales, entre otros, un inmenso campo de batalla donde los partidos libran duras batallas lo que complicará el entendimiento. El impuesto sobre el patrimonio fue eliminado por Zapatero en 2008, aunque lo recuperó de forma temporal para los ejercicios 2011 y 2012. Rajoy, durante su mandato ha ido prorrogando la vigencia... Este impuesto aporta unos 1.000 millones a las arcas regionales, un importe notable en un contexto en el que los Gobiernos autonómicos incumplen el objetivo de estabilidad. En 2014, gastaron 17.500 millones más de lo que ingresaron.

## FLA y proveedores: 122.000 millones a devolver

■ Los planes de asistencia financiera del Gobierno para las administraciones públicas son tantos y tan cuantiosos, que un cambio de interlocutor en los deudores podría suponer un traspie para las arcas estatales. El Ministerio de Hacienda ha venido recordando en las últimas semanas (ya desde antes de las elecciones) que un cambio de color en los Ejecutivos autonómicos y locales no cambia los acuerdos contraídos.

Los Fondos de Financiación estatales y los Fondos de Proveedores han consignado ya 122.000 millones de euros que deben ser devueltos por las autonomías. Desde el departamento de Cristóbal Montoro recuerdan que estas cantidades han sido comprometidas y que sus condiciones de pago no pueden modificarse de forma retroactiva, señalan. Trece autonomías incumplieron los

objetivos de déficit el año pasado. El procedimiento es la presentación de un plan de ajuste financiero para corregir los presupuestos y alcanzar las metas de estabilidad presupuestaria. El calendario actual lo dificulta mucho. Las negociaciones para formar gobierno pueden llevar dos meses y poco se podría hacer al respecto antes de septiembre. Otra cosa

son además los planes de ajuste que están encima de las mesas de Hacienda de las regiones que incumplieron en 2013: Cataluña, Murcia, Comunidad Valenciana, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra. Solo Cataluña no ha celebrado elecciones el pasado domingo, aunque supuestamente lo hará en septiembre. Estos documentos no se revisarán tampoco hasta septiembre.